

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resolución de clasificación: folio 310573624000014.

Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos. Resolución del **Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán**, correspondiente a la solicitud de acceso a la información pública del estado de Yucatán con número de folio **310573624000014**.

VISTOS, para resolver la clasificación de la información requerida a través de la solicitud de acceso a la información pública del estado de Yucatán con número de folio **310573624000014**, y

Antecedentes

I. Solicitud de información: el 23 de marzo de 2024 la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán recibió la solicitud de acceso a la información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio **310573624000014**, mediante la cual el solicitante requiere lo siguiente:

“Favor de permitirme la sentencia marcada con el expediente número 52/2021, emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en el municipio de Mérida, Yucatán, a siete de octubre del año dos mil veintiuno.” (Sic)

II. Turno a la unidad administrativa: el 27 de marzo de 2024 la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, turnó la solicitud de información a la **Dirección de Projectistas** que es el área competente para conocer de lo solicitado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, del *Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán*.

III. Respuesta: el 7 de abril de 2024 la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán recibió la respuesta de la **Dirección de Projectistas** a la solicitud de acceso a la información pública del estado de Yucatán con número de folio **310573624000014**, en los siguientes términos:

“En respuesta a la solicitud de acceso a la información pública del estado de Yucatán marcada con el número de folio **310573624000014**, presentada el 23 de marzo de 2024, a las 13:52:40 horas, por **Juan Chan Gonzalez**, mediante la cual solicita:

“Solicito saber:

“Favor de permitirme la sentencia marcada con el expediente número 52/2021, emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Yucatán, en el municipio de Mérida, Yucatán, a siete de octubre del año dos mil veintiuno.” (Sic)

Respuesta

Hago de su conocimiento que el **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán**, por conducto de la Dirección de Proyectistas, realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros, sistemas o expedientes, identificando el expediente solicitado con número 52/2021 actualmente en substanciación, es decir, se trata de asuntos que se encuentran en trámite.

Ahora bien, tomando en cuenta que la esencia de su petición es acceder a la sentencia del expediente 52/2021; se estima que la información es reservada en tanto que forma parte de un procedimiento jurisdiccional que no ha causado estado; y, por lo tanto, se actualiza el supuesto de reserva previsto en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dispone que, como información reservada, podrá clasificarse aquella cuya publicación “Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado”.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 113, fracción XI, dispone lo siguiente:

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. a la X. ...

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII. y XIII. ...

El referido artículo encuentra concordancia con el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán:

Artículo 78. Clasificación

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Para tal efecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de realizar la

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

clasificación de la información, con base en las disposiciones y el procedimiento previsto en el título sexto de la Ley general y los lineamientos generales que emita el sistema nacional.

Al respecto, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas disponen, en su numeral trigésimo, lo siguiente:

Trigésimo. *De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:*

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurren los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

De las disposiciones legales y normativas en cita, se desprende que para actualizar la causal de reserva de la información prevista en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se deberá acreditar que se vulnera la conducción de los expedientes

judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, a través de los siguientes elementos:

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Bajo este orden de ideas, es que se considera que la información solicitada por la persona peticionara debe de clasificarse como reservada, en tanto que la misma constituye materia documental del expediente número 52/2021, actualmente en substanciación.

Existencia de un juicio en trámite

En términos de lo dispuesto por los artículos 73 Ter, fracción V, y 75 Quater, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es un Organismo Constitucional Autónomo, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, dotado de plena jurisdicción, autonomía e independencia para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, que tiene por objeto conocer, resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado y sus municipios, y los particulares; así como respecto de las faltas administrativas graves que correspondan a los servidores públicos y a particulares relacionados con hechos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves, en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán establece, en su artículo 4, las competencias para conocer y resolver los asuntos. Del estudio normativo previamente realizado, se advierte que los asuntos en contra las autoridades administrativas o fiscales del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios y por los organismos autónomos, a excepción del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, son juicios material y formalmente jurisdiccionales radicados en el Tribunal; actualmente en substanciación.

Prueba de daño

Ahora bien, por lo que hace a la prueba de daño prevista en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se estima que la

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

divulgación de la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable y de perjuicio significativo al interés público, así como al estudio y valoración de las pruebas aportadas en los asuntos que se encuentra en trámite, pues podría ocasionar una disminución en la capacidad del órgano jurisdiccional para la toma de decisiones.

El proceso jurisdiccional es el mecanismo idóneo para la resolución de los conflictos de la población, pues presenta herramientas eficaces para proteger los intereses de las partes y garantiza efectivamente el debido proceso. Por ello, la reserva de la información permite que el razonamiento judicial se realice con un correcto equilibrio, al evitar que injerencias externas busquen influir en el caso; asimismo, permite una sana deliberación del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

Por otra parte, se considera que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información supera el interés público general de que se difunda, toda vez que el bien jurídico que protege la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es evitar la injerencia de cualquier persona externa que, por mínima que sea, afecte la debida conducción de los expedientes judiciales, menoscabando la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva conferida a las partes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el derecho al debido proceso.

También, se considera que la limitación al acceso de la información que se solicita se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, puesto que se trata de una medida temporal, cuya finalidad es salvaguardar la adecuada sustanciación de los procedimientos judiciales o los seguidos en forma de juicio, permitiendo a las partes a ejercer su derecho de audiencia y de defensa y a la autoridad valorar y resolver sin la intervención de factores externos, sobre la controversia sometida a su jurisdicción. Máxime, que es el medio menos lesivo a efecto garantizar el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento hasta en tanto se dice la resolución definitiva.

Período de reserva

En cumplimiento al artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el numeral décimo quinto, fracción I, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se propone que el período de reserva sea de un año o, en su caso, hasta en tanto los expedientes judiciales hayan causado estado.

Conocimiento del Comité de Transparencia

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º, Apartado A, fracción I y 16, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 23, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 113, fracción XI, y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 53, fracción I, y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; y numerales primero, cuarto, sexto, séptimo, octavo y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se solicita, de la manera más atenta, someter a consideración del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, la clasificación como reservada de la información requerida en la solicitud que nos ocupa.

Considerandos

I. Competencia. El comité de transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación de la información que realicen los titulares de las áreas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán en términos de lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 5 y 6 del Acuerdo general por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se regula el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán¹ y artículo transitorio quinto del Acuerdo por el que se designa a la persona titular de la Unidad de Transparencia y a la persona presidenta del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán².

II. Materia. El objeto de esta resolución consiste en analizar la clasificación propuesta por la **Dirección de Projectistas** del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en razón de lo requerido en la solicitud de acceso a la información pública identificada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio **310573624000014**, a efecto de **confirmarla, modificarla o revocarla** con fundamento en los preceptos legales citados en el considerando I de esta resolución.

¹ Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 3 de abril de 2019.

² **Quinto. Interpretación**

A partir de la entrada en este acuerdo, y en tanto se armonizan las disposiciones del *Acuerdo general por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se regula el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán*, los artículos 4 y 7 del referido Acuerdo general en los que se hace alusión a la Secretaría de Acuerdos o al Secretario de Acuerdos, se entenderán referidos a la Coordinación General de Documentación o al Coordinador General de Documentación, respectivamente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

III. Estudio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su artículo 6, párrafos primero y segundo, que el derecho a la información será garantizado por el Estado, y que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Asimismo, la Constitución federal determina, en su artículo 6, apartado A, fracción I, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

En línea con lo anterior la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 16, párrafos primero y segundo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; y que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

De las expresiones Constitucionales se advierte que la información podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y la que se refiere al ámbito privado de las personas, así como a los datos personales, debe estar protegida en los términos que fija la ley, por lo que, sin distinción, toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 1, es la ley, de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. Dicho instrumento regula el derecho de acceso a la información pública y las excepciones a este, cuando la información actualice alguna de las causales de reserva o confidencialidad.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, fracción VII, 4 y 18, de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que el derecho humano de acceso a la información pública comprende el solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados; por lo que estos tienen la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina, en su artículo 7, párrafo segundo, que el derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la referida ley.

Por otra parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone, en relación con la clasificación, en sus artículos 23, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 113, fracción XI, y 114, lo siguiente:

Artículo 23. Son **sujetos obligados** a transparentar y permitir el acceso a su información y **proteger los datos personales** que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, **órganos autónomos**, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, **de las Entidades Federativas** y municipal.

Artículo 100. La **clasificación** es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

Los **supuestos de reserva o confidencialidad** previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.

Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá **confirmar, modificar o revocar** la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 104. *En la aplicación de la **prueba de daño**, el sujeto obligado deberá justificar que:*

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

Artículo 106. *La **clasificación de la información** se llevará a cabo en el momento en que:*

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o*
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

Artículo 108. *Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 109. *Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.*

Artículo 113. *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

I. a la X. ...

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII. y XIII. ...

Artículo 114. *Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la **prueba de daño** a la que se hace referencia en el presente Título.*

Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán establece, en sus artículos 53, fracción I, y 78, sobre la negativa y clasificación de la información, lo siguiente:

Artículo 53. Negativa o inexistencia de la información

Los sujetos obligados únicamente podrán negar la información solicitada previa demostración o motivación de que esta encuadra en alguna de las siguientes causales:

I. Se trate de información confidencial o reservada.

II. y III. ...

Artículo 78. Clasificación

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder se encuentra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. Para tal efecto, los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de realizar la clasificación de la información, con base en las disposiciones y el procedimiento previsto en el título sexto de la Ley general y los lineamientos generales que emita el sistema nacional.

Por otra parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas disponen, en sus numerales primero, cuarto, sexto, séptimo, octavo y trigésimo, lo siguiente:

Primero. *Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.*

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de que se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos.

La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño y de interés público.

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o*
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.

Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos.

Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.

Trigésimo. *De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:*

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

En el caso concreto, la **Dirección de Proyectistas**, en términos del artículo 32 del *Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán*, tiene entre sus facultades y obligaciones,

Por tanto, una vez establecido el marco jurídico aplicable, así como la competencia de la **Directora de Proyectistas** se procederá a determinar si resulta adecuada la **clasificación como reservada** de la información que se desprende del expediente 52/2021, actualmente en substanciación, es decir, se trata de asuntos que se encuentran en trámite.

En principio, el andamiaje constitucional y legal arriba referido hace patente que todo acto de autoridad es de interés general y, en consecuencia, susceptible de ser conocido por todas las

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

personas. Sin embargo, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal, el derecho fundamental de acceso a la información pública no es absoluto, sino que su ejercicio encuentra límites razonables en función de ciertas causas e interés que resultan relevantes. **Por ello, la publicidad de la información que obra en poder de los sujetos obligados encuentra como excepción aquella que sea temporalmente reservada o confidencial, cuando de su difusión pueda derivarse perjuicio por causa de interés público o seguridad nacional.**

Al respecto, resulta orientador el criterio sostenido por el Pleno del Máximo Tribunal, en la siguiente tesis aislada:

Época: Novena Época.

Registro: 191967.

Instancia: Pleno.

Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional

Tesis: P. LX/2000. Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

A efecto de tener mayor claridad en la presente resolución, resulta importante recordar que, en respuesta a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, la **Directora de**

Proyectistas, como área competente para conocer de la información de mérito, manifestó que [...], tomando en cuenta que la esencia de su petición es acceder a la sentencia del expediente número 52/2021; se estima que la información es reservada en tanto que forma parte de un procedimiento jurisdiccional que no ha causado estado; y, por lo tanto, se actualiza el supuesto de reserva previsto en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dispone que, como información reservada, podrá clasificarse aquella cuya publicación “Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado”.

Al respecto, la Directora de Proyectistas señala que los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas disponen, en su numeral trigésimo, lo siguiente:

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

- I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
- II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

Por otra parte, una vez hecho patente el extremo de excepcionalidad radicado en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, argumenta que se considera que la información solicitada por la persona peticionara debe de clasificarse como reservada, en tanto que la misma constituye materia documental del expediente 52/202, actualmente en substanciación, es decir, se trata de asuntos que se encuentran en trámite y que, al momento de emitir la presente respuesta.

Análisis de la motivación

El Comité de Transparencia, una vez hecho valer los argumentos del responsable de la información consistentes en la identificación de los supuestos de clasificación, en el examen del caso y en la aplicación de la prueba del daño, procederá al análisis de la motivación con la finalidad de determinar si efectivamente el expediente 52/2021, actualmente en substanciación; constituyen información reservada y, por tanto, no son susceptibles de divulgación antes de que estos causen estado.

Al respecto debe tenerse en consideración que el derecho humano de acceso a la información pública a que se refieren el artículos 6º, párrafos primero y segundo, y Apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es absoluto, pues encuentra limitaciones como lo es frente a los casos de clasificación previstos en las leyes, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En efecto, en el caso concreto destaca lo dispuesto en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que refiere que **podrá clasificarse como información reservada aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado**. De igual forma, cabe recalcar que los alcances de dicho supuesto fueron retomados en el numeral trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, **los cuales son de observancia obligatoria para los sujetos obligados**.

En este sentido, el Comité de Transparencia considera que la reserva de la información del expediente 52/2021, actualmente en substanciación, es decir, asuntos que se encuentran en trámite trasciende, en efecto, a la **protección del eficaz mantenimiento del proceso jurisdiccional** en sus dimensiones: a) formal, que se refiere a la integración documentada de los actos procesales; y b) material, que se refiere a la construcción y exteriorización de la decisión judicial, decir, poner en riesgo la sana deliberación del Magistrado Instructor y del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán al resolver los asuntos. En efecto, la información solicitada forma parte de expedientes de los expedientes judiciales que **no han causado estado**.

De tal suerte que, cualquier información que pudiera vulnerar la protección del eficaz mantenimiento del proceso jurisdiccional, en cualquiera de sus dimensiones, en virtud de no haber causado estado, resulta, en términos del marco jurídico en análisis, susceptible de ser clasificado temporalmente como información reservada previa aplicación de la prueba del daño. Al respecto, cabe destacar que la legislación general redujo el acceso a la información jurisdiccional a un momento procesal concreto marcado por solución definitiva de los expedientes, es decir, toda información que obre en un expediente judicial, previo a la emisión de la resolución, se entenderá válidamente reservada.

Análisis específico de la prueba de daño

En relación con la **existencia de un juicio en trámite**, en efecto, en términos de lo dispuesto por los artículos 73 Ter, fracción V, y 75 Quater, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es un Organismo Constitucional Autónomo, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, dotado de plena jurisdicción, autonomía e independencia para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, que tiene por objeto conocer, resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado y sus municipios, y los particulares; así como respecto de las faltas administrativas graves que correspondan a los servidores públicos y a particulares relacionados con hechos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves, en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas.

De tal forma que el **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán**, por conducto de la **Directora de Projectistas**, realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros, sistemas o expedientes, identificando el expediente número 52/2021, actualmente en substanciación, es decir, se trata de asuntos que se encuentran en trámite.

En efecto, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán establece, en su artículo 4, las competencias para conocer y resolver los asuntos. Por ello, el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, a partir del estudio, advierte que el expediente número 52/2021, es juicio en material y formalmente jurisdiccionales radicados en el Tribunal; actualmente en substanciación, es decir, se trata de asuntos que se encuentran en trámite.

En este sentido, resulta evidente que se acreditan los extremos previstos en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral trigésimo de Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Por otra parte, el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, por lo que hace a la **prueba de daño** prevista en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sostiene que **la divulgación de la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable y de perjuicio significativo al interés público**, así como al estudio y valoración de las pruebas aportadas en los asuntos que se encuentra en trámite, pues podría ocasionar una disminución en la capacidad del órgano jurisdiccional para la toma de decisiones.

Al respecto, cabe recalcar que, en efecto, el proceso jurisdiccional es el mecanismo idóneo para la resolución de los conflictos de la población, pues presenta herramientas eficaces para proteger los intereses de las partes y garantiza efectivamente el debido proceso. Por ello, la reserva de la información permite que el razonamiento judicial se realice con un correcto equilibrio, al evitar que injerencias externas busquen influir en el caso; asimismo, permite una sana deliberación del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

Por otra parte, este Comité de Transparencia, sostiene que **el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información supera el interés público** general de que se difunda, toda vez que el bien jurídico que protege la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es evitar la injerencia de cualquier persona externa que, por mínima que sea, afecte la debida conducción de los expedientes judiciales, menoscabando la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva conferida a las partes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el derecho al debido proceso.

También, el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán considera que **la limitación al acceso de la información que se solicita se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio**, puesto que se trata de una medida temporal, cuya finalidad es salvaguardar la adecuada sustanciación de los procedimientos judiciales o los seguidos en forma de juicio, permitiendo a las partes a ejercer su derecho de audiencia y de defensa y a la autoridad valorar y resolver sin la intervención de factores externos, sobre la controversia sometida a su jurisdicción. Máxime, que es el medio menos lesivo a efecto garantizar el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento hasta en tanto se dice la resolución definitiva.

Por lo que respecta a la **prueba de daño**, el Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, reitera que, en cumplimiento al artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el numeral décimo quinto, fracción I, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la

información, así como para la elaboración de versiones públicas, el período de reserva sea de un año o, en su caso, hasta en tanto los expedientes judiciales hayan causado estado.

Así, en resumen, del análisis del artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se desprende que su finalidad radica en la **protección del eficaz mantenimiento del proceso jurisdiccional**, particularmente por lo que respecta a la sana integración documentada de los actos procesales, y a la construcción y exteriorización de la decisión judicial, es decir una conducción adecuada del expediente judicial desde su apertura hasta que cause estado, esto es, quede totalmente concluido; por tanto, las actuaciones, diligencias o constancias llevada a cabo durante todo ese lapso solo atañen a las partes para el sostenimiento del equilibrio procesal.

En efecto, del análisis de las razones que sustentan el supuesto de reserva se obtiene que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, ya que este último no solo colisiona con el derecho de oposición de las partes a la publicación de sus datos personales en las actuaciones, diligencias o constancias, y que se ha hecho valer en todos los expedientes en los acuerdos de inicio, sino que dicha causa restrictiva del acceso a la información **no es posible superarla suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contenga**; toda vez que el sustento de reserva radica precisamente en la **protección del eficaz mantenimiento del proceso jurisdiccional**, previsto en el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral trigésimo Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, **hasta en tanto los expedientes judiciales no hayan causado estado**.

En consecuencia, toda vez que a la fecha de la resolución de clasificación los asuntos en contra del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, actualmente en substanciación, es decir, asuntos que se encuentran en trámite, no han causado estado, de conformidad con el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se estima procedente **confirmar la clasificación como temporalmente reservado** de la información requerida a través de la solicitud de acceso a la información pública del estado de Yucatán con número de folio **310573624000014**, hasta en tanto causen estado, **lo que en su momento exigirá una valoración particular sobre la información confidencial que, en su caso, pudiera contener, así como sobre la necesidad de generar la versión pública respectiva**.

Finalmente, este Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán,

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resuelve

Primero. Se **confirma** la **clasificación de reserva** de la información requerida mediante solicitud de acceso a la información pública del estado de Yucatán con número de folio **310573624000014**, en los términos propuestos por la **Dirección de Projectistas** del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

Segundo. Se instruye a la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán dé **respuesta al solicitante** en términos de lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 79 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

Esta resolución fue aprobada por los integrantes del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa en sesión extraordinaria celebrada el 9 de abril de 2024.

(RÚBRICA)

Ing. Gabriel Ismael Sosa Valencia
Coordinador General de Documentación y Presidente del Comité

(RÚBRICA)

Lic. Laura Victoria Díaz Gonzalez
Directora de Projectistas e integrante del Comité

(RÚBRICA)

C.P. Addy Erika Camacho Pat

Directora de Administración e integrante del Comité

(RÚBRICA)

Lic. Mauricio López Díaz
Oficial de Partes y Secretario de Actas y Acuerdos

“Esta hoja de firmas forma parte de la **Resolución de clasificación de reserva** del Comité de Transparencia de la información requerida a través de la solicitud de acceso a la información pública del estado de Yucatán con número de folio **310573624000014**.”